

ACUERDO: CG-IEEPCO-SNI-128/2013, RESPECTO A LA ELECCIÓN DE CONCEJALES MUNICIPALES CELEBRADA EN EL AYUNTAMIENTO DE IXTLÁN DE JUÁREZ, QUE ELECTORALMENTE SE RIGE POR SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS.

Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, respecto de la elección de concejales municipales del Ayuntamiento de Ixtlán de Juárez, que electoralmente se rige por Sistemas Normativos Internos, que se genera a partir de los siguientes:

ANTECEDENTES

A. ACTOS PREPARATORIOS DE LA ELECCIÓN

1. Acuerdo CG-IEEPCO-SNI-1/2012. El 17 de noviembre de 2012 el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, aprobó el Catálogo General de los Municipios que se rigen por Sistemas Normativos Internos, entre ellos, al municipio que nos ocupa.

2. Notificación. El 10 de abril de 2013 se recibió oficio signado por el ciudadano Mauricio Pérez Santiago, Secretario Municipal de Ayuntamiento de Ixtlan de Juárez, Oaxaca, mediante el cual informó que 05 de abril del año en curso el cabildo municipal acordó celebrar la elección de concejales municipales el día 19 de octubre del presente año.

3. Convocatoria. El día 5 de octubre del 2013 el Consejo Municipal Electoral de Ixtlan de Juárez, Oaxaca emitió la convocatoria para la elección de los Concejales Municipales para el periodo 2014-2016.

B. JORNADA ELECTORAL Y SUS RESULTADOS

1. Asamblea General Comunitaria: El día diecinueve de octubre del dos mil trece se realizó la Asamblea General Comunitaria, convocada para la celebración de la elección de Concejales Municipales.

2. Elección del órgano electoral municipal. El día diecinueve de octubre del dos mil trece durante el desarrollo de la Asamblea General Comunitaria, se designó a la Mesa de Debates como órgano encargado de conducir los trabajos de la elección, resultando electos los siguientes ciudadanos:

CARGO	MESA DE DEBATES
	NOMBRE
PRESIDENTE	ALBERTO JESÚS BELMONTE
SECRETARIO	AMADO MAURILIO MÉNDEZ PACHECO
PRIMER ESCRUTADOR	ARMANDO NAHÚM GARCÍA PÉREZ
SEGUNDO ESCRUTADOR	LUIS PACHECO RODRÍGUEZ

3. Computo municipal. El día diecinueve de octubre del dos mil trece el Consejo Municipal Electoral concluyó el computo municipal de la elección, mismo que arrojó los siguientes resultados:

CANDIDATO PRESIDENTE MUNICIPAL (PROPIETARIO)	VOTOS	
	CON NUMERO	CON LETRA
Mauro Aquino Aquino	18	Dieciocho
Roman Manuel Aquino	144	Ciento Cuarenta y Cuatro
Manuel Pacheco Rodríguez	192	Ciento Noventa y Dos
TOTAL	354	Trescientos Cincuenta y Cuatro

CANDIDATO PRESIDENTE MUNICIPAL (SUPLENTE)	VOTOS	
	CON NUMERO	CON LETRA
Roman Manuel Aquino Matias	102	Ciento Dos
Jesus Paz Hernández	15	Quince
Manuel Gilberto Garces Perez	132	Ciento Treinta y Dos
TOTAL	249	Doscientos Cuarenta y Nueve

CANDIDATO SINDICO MUNICIPAL (PROPIETARIO)	VOTOS	
	CON NUMERO	CON LETRA
Leobardo Mario Hernández Pérez	281	Doscientos Ochenta y Uno
Alberto Jesús Belmonte	44	Cuarenta y Cuatro
Salvador Antonino López Hernández	32	Treinta y Dos
TOTAL	357	Trescientos Cincuenta y Siete

CANDIDATO SINDICO MUNICIPAL (SUPLENTE)	VOTOS	
	CON NUMERO	CON LETRA
Rosendo Santos Pérez Pérez	20	Veinte
Luis Pacheco Rodríguez	108	Ciento Ocho
Eusebio Martínez Martínez	120	Ciento Veinte
TOTAL	248	Doscientos Cuarenta y Ocho

CANDIDATO REGIDOR PRIMERO (PROPIETARIO)	VOTOS	
	CON NUMERO	CON LETRA
Rolando Pérez Sánchez	153	Ciento Cincuenta y Tres
German Felipe Ramírez Hernández	42	Cuarenta y Dos
Mauro Hernández Aquino	54	Cincuenta y Cuatro
TOTAL	249	Doscientos Cuarenta y Nueve

CANDIDATO REGIDOR PRIMERO (SUPLENTE)	VOTOS	
	CON NUMERO	CON LETRA
Eulalio Ruiz Gopar	31	Treinta y Uno
Rodrigo Jiménez Pérez	106	Ciento Seis
Norberto Celestino Pérez Pérez	13	Trece
TOTAL	150	Ciento Cincuenta

CANDIDATO REGIDOR SEGUNDO (PROPIETARIO)	VOTOS	
	CON NUMERO	CON LETRA
Guadalupe Ángel Ruiz Martínez	80	Ochenta
David Ramírez Pérez	256	Doscientos Cincuenta y Seis
Pablo Torres Pérez	10	Diez
TOTAL	346	Trescientos Cuarenta y Seis

CANDIDATO REGIDOR SEGUNDO (SUPLENTE)	VOTOS	
	CON NUMERO	CON LETRA
Facundo Pacheco Velasco	40	Cuarenta
Nora García Aquino	180	Ciento Ochenta
Francisco Santiago Méndez	25	Veinticinco
TOTAL	245	Doscientos Cuarenta y Cinco

CANDIDATO REGIDOR TERCERO (PROPIETARIO)	VOTOS	
	CON NUMERO	CON LETRA
Agustín Leon García	139	Ciento Treinta y Nueve
Alejandro Pérez Ruiz	45	Cuarenta y Cinco
Alberto Garcia Garcia	155	Ciento Cincuenta y Cinco
TOTAL	339	Trescientos Treinta y Nueve

CANDIDATO REGIDOR TERCERO (SUPLENTE)	VOTOS	
	CON NUMERO	CON LETRA
Agustín León García	109	Ciento Nueve
Ana Nelly Ruiz Martínez	29	Veintinueve
Manuel Leopoldo Alavez	102	Ciento Dos
TOTAL	240	Doscientos Cuarenta

CANDIDATO REGIDOR CUARTO (PROPIETARIO)	VOTOS	
	CON NUMERO	CON LETRA
Nora García Aquino	151	Ciento Cincuenta y Uno
Mauro Hernández Aquino	37	Treinta y Siete
Guadalupe Ángel Ruiz Martínez	157	Ciento Cincuenta y Siete
TOTAL	345	Trescientos Cuarenta y Cinco

CANDIDATO REGIDOR CUARTO (SUPLENTE)	VOTOS	
	CON NUMERO	CON LETRA
Facundo Pacheco Velasco	57	Cincuenta y Siete
Javier Medrano Martínez	142	Cinto Cuarenta y Dos
Norberto Celestino Pérez Pérez	39	Treinta y Nueve
TOTAL	238	Doscientos Treinta y Ocho

CANDIDATO REGIDOR QUINTO (PROPIETARIO)	VOTOS	
	CON NUMERO	CON LETRA
Germán Felipe Ramírez Hernández	42	Cuarenta y Dos
Gabriel Pacheco Aquino	214	Doscientos Catorce
Ana Nelly Martínez	76	Setenta y Seis
TOTAL	332	Trescientos Treinta y Dos

CANDIDATO REGIDOR QUINTO (SUPLENTE)	VOTOS	
	CON NUMERO	CON LETRA
Norberto Celestino Pérez Pérez	12	Doce
Pablo Hernández Pérez	125	Ciento Veinticinco
Enrique Vargas Ramirez	10	Diez
TOTAL	147	Ciento Cuarenta y Siete

CANDIDATO REGIDOR SEXTO (PROPIETARIO)	VOTOS	
	CON NUMERO	CON LETRA
Laura Pérez Pérez	293	Doscientos Noventa y Tres
German Felipe Ramirez Hernández	19	Diescinueve
German Felipe Ramirez Hernández	25	Veinticinco
TOTAL	337	Trescientos Treinta y Siete

CANDIDATO REGIDOR SEXTO (SUPLENTE)	VOTOS	
	CON NUMERO	CON LETRA
Salvador Pizarro Jiménez	136	Ciento Treinta y Seis
Luis Pacheco Jiménez	96	Noventa y Seis
Eduardo Santiago García	15	Quince
TOTAL	247	Doscientos Cuarenta y Siete

4. Concejales electos. Una vez concluido el computo municipal, resultaron electos los siguientes ciudadanos:

CARGO	CONCEJALES ELECTOS
	NOMBRE
Presidente Municipal	Manuel Pacheco Rodríguez
Suplente	Manuel Gilberto Garcés Pérez
Sindico Municipal	Leobardo Mario Hernández Pérez
suplente	Eusebio Martínez Martínez
Regidor Primero	Rolando Pérez Sánchez
Suplente	Rodrigo Jiménez Pérez
Regidor Segundo	David Ramírez Pérez
Suplente	Nora García Aquino
Regidor Tercero	Alberto García García
suplente	Agustín León García
Regidor Cuarto	Guadalupe Ángel Ruiz Martínez
suplente	Javier Medrano Martínez
Regidor Quinto	Gabriel Pacheco Aquino
Suplente	Pablo Hernández Pérez
Regidor Sexto	Laura Pérez Pérez
Suplente	Salvador Pizarro Jiménez

5. Acta de acuerdo de fecha seis de noviembre de dos mil trece. Presentada por la autoridad municipal de la comunidad de San Gaspar Yagalaxi, municipio y distrito de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, se acordó por la mayoría de los ciudadanos de investigar sobre las elecciones municipales, para lo cual la asamblea nombró a cinco ciudadanos comisionados quienes

investigarán acerca de las elecciones municipales, los ciudadanos son los siguientes: RENE CRUZ PACHECO, HERNÁN PACHECO MORALES, CARLOS PACHECO NUÑEZ, GASPAR NUÑEZ HERNANDEZ Y ALEJANDRO ESTEBAN NÚÑEZ. Dichos ciudadanos se comprometieron investigar sobre las elecciones ya que no fueron convocados por el municipio a participar en las elecciones.

6. Escrito del C. Carlos Pacheco Núñez, comisionado por la asamblea general comunitaria de la comunidad de San Gaspar Yagalaxi, Ixtlán de Juárez, Oaxaca. Dirigido a la Lic. Gloria Zafra, Directora Ejecutiva de la Dirección de Sistemas Normativos Internos de este Instituto; mediante el cual expone:

“Debido a que no hemos sido convocados para elegir a los nuevos concejales para integrar el Ayuntamiento del Municipio de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, es por ello que mediante asamblea general comunitaria de fecha seis de noviembre de dos mil trece, me nombraron comisionado comunitario con el fin de recabar información respecto a las elecciones en el municipio de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, en ese sentido y en términos del artículo 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le solicito la siguiente información:

1.- Si la Dirección que usted representa sabe si ya se llevó a cabo la asamblea de elección de concejales en el municipio de Ixtlán de Juárez, Oaxaca.

2.- En caso de que se haya llevado a cabo la asamblea general de elección, cuando es que tuvo verificativo y si el Consejo General del Instituto Estatal Electoral ha validado dicha elección.”

7. Escrito de inconformidad de los CC. Carlos Pacheco Núñez, y otros de fecha once de diciembre de dos mil trece. Mediante el cual los ciudadanos exponen lo siguiente:

“1.- La comunidad Indígena a la cual pertenecemos es conocida como San Gaspar Yagalaxi, que se rige a través de sus sistemas normativos internos al igual que la generalidad de las comunidades que integran nuestro municipio, por tal razón, el municipio de Ixtlan de Juárez, Distrito de su mismo nombre, Oaxaca, es catalogado como municipio que se rige por sistema normativos internos ya que nombran a las autoridades a través de la asamblea general comunitaria, en ese sentido, como ciudadanos de la comunidad de San Gaspar Yagalaxi, perteneciente al municipio de Ixtlan de Juárez, Oaxaca, solicitamos al Consejo General del Instituto nos garantice el derecho de votar y ser votados para elegir a los concejales de nuestro municipio.

2.-El cuatro de enero de dos mil doce mediante ACTA DE ACUERDOS celebrada en la comunidad de la Josefina, Ixtlán de Juárez, Oaxaca, y el que intervinieron nuestras autoridades comunitarias y otras autoridades, el Presidente Municipal de Ixtlan de Juárez, Oaxaca, se comprometió a analizar con su cabildo y en asamblea general la forma de invitarnos para participar en la elección de presidente municipal, sin que hasta la fecha nos haya notificado la respuesta o acuerdo correspondiente.

3.- Mediante oficio fechado el 23 de julio de 2013, suscrito por nuestras autoridades comunitarias los CC. BENITO PÉREZ MARTINEZ, JUVENTINO PÉREZ Y LEONARDO CRUZ CRUZ, Agente Municipal, Sindico Municipal y Alcalde Único, respectivamente; y presentado el 30 de julio de 2013 en la Secretaria Municipal del H. Ayuntamiento de Ixtlan de Juárez, Oaxaca; por medio del cual solicitamos al C. JOSÉ BEDOLLA GÓMEZ, Presidente Municipal de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, convocarnos para participar en el proceso de elección para los nuevos concejales al H. Ayuntamiento de Ixtlán de Juárez, o a las reuniones previas para lograr los acuerdos necesarios, sin embargo hasta la fecha no hemos recibido respuesta alguna.

4.- En asamblea general comunitaria de la Agencia Municipal de San Gaspar Yagalaxi, de fecha 06 de noviembre de 2013, se acordó investigar sobre las elecciones municipales, para lo cual la asamblea nombró a los CC. RENÉ CRUZ PACHECO, HERNÁN PACHECO MORALES, CARLOS PACHECO NÚÑEZ, GASPAR NÚÑEZ HERNANDEZ Y ALEJANDRO ESTEBAN NÚÑEZ, como comisionados para investigar sobre la celebración de elección de concejales del Honorable Ayuntamiento de Ixtlan de Juárez, Distrito de su mismo nombre, Oaxaca.

5.- Por medio de oficio fechado el siete de octubre de dos mil trece, dirigido a la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el Comisionado Carlos Pacheco Núñez, solicitó textualmente la siguiente información:

1.- Si la Dirección que usted representa sabe si ya se llevó acabo la asamblea de elección de concejales en el municipio de Ixtlán de Juárez, Oaxaca.

2.- En caso de que se haya llevado acabo la asamblea general de elección, cuando es que tuvo verificativo y si el Consejo General del Instituto Estatal Electoral ha validado dicha elección.

Por lo que de manera verbal, la Secretaría de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos le informó que el 13 de octubre de 2013 tuvo verificativo la asamblea general de elección de los concejales del municipio de Ixtlan de Juárez, Distrito de sus mismo nombre, Oaxaca, por lo que dicho acto y omisión del Presidente Municipal de Ixtlan de Juárez, Oaxaca de convocarnos a la asamblea general de elección de fecha 13 de octubre de 2013, nos causan agravios, violando en nuestro perjuicio como individuos y como colectividad

indígena zapoteca lo previsto en los artículos 16, 23, fracción III, 24, fracción I y II, 25, apartado A, párrafo primero, fracción II y Apartado D, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1 y 2, apartado A, fracción I,II,III Y VIII de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 1, apartado 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2 y 5 inciso c) del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; así como 1,2,3, y 4 y demás artículos relativos de la Declaración de las Naciones Unidad sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Por lo que al no convocarnos a la asamblea de elección realizada el 13 de octubre de dos mil trece, nos causa agravios en razón de que viola en nuestro perjuicio la garantía constitucional de votar y ser votado.

Lo anterior es porque el apartado A, fracción I, II, III del artículo, 2° de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, reconoce y garantiza nuestro derecho como pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación, en consecuencia, a la autonomía, para decidir nuestras formas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de nuestras formas propias de gobierno interno.

Por otra parte, con la reforma y entrada en vigor del artículo 1 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, obliga a las autoridades correspondientes a interpretar las normas relativas a los derechos humanos de conformidad a los que establece nuestra carta magna y con los tratados internacionales en la materia, lo que quiere decir, que las autoridades en el ámbito de su competencia se encuentran obligadas a: 1) promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; 2) Interpretar las normas de derechos humanos como el derecho de los pueblos y comunidades indígenas con un criterio extensivo y, 3) aplicarlas acorde con los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Esto es, para que la determinación del derecho aplicable, así como de su sentido, alcance y contenido esencial, debe realizarse una autentica labor hermenéutica acorde con la propia naturaleza de los derechos fundamentales.

En términos de dicha reforma no existe jerarquía alguna entre las normas de derechos humanos previstas en la Constitución y aquellas de los tratados internacionales de derechos humanos.

Por tal razón, la omisión del Presidente Municipal violenta nuestros derechos políticos electorales votar y ser votado, por lo que debe imperar lo que la Constitución Federal, tratados internacionales y la Constitucionales Estatal disponen al respeto, ya que como

ciudadanos pertenecientes al municipio de Ixtlan de Juárez, Oaxaca, tenemos derechos de votar y ser votado, porque nos encontramos inmersos en el ejercicio de nuestros derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política Federal y Local, así como por el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por el numeral 23 de la convención Interamericana de los Derechos Humanos, en coherencia con lo previsto en los numerales 35 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

En ese contexto, es importante considerar que ese Instituto al momento de analizar los requisitos de validez de la asamblea de elección de fecha 13 de octubre de 2013, en que se eligieron a los concejales del municipio de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, debe de declararla NULA, ya que omitieron convocarnos a dicha asamblea a pesar de que desde julio del presente año solicitamos la participación como parte de la comunidad de San Gaspar Yagalaxi, Ixtlán de Juárez, Oaxaca; sin embargo pasando por alto nuestra garantía de audiencia y violentando nuestros derechos políticos electorales de votar y ser votados, realizaron dicha asamblea general comunitaria de elección sin convocarnos.

En tal circunstancia, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca IEEPCO, debe emitir un ACUERDO en el sentido de que además de salvaguardar los principios, normas instituciones procedimientos y prácticas electorales de nuestro pueblo zapoteca, así como a los principios de justicia democracia, no discriminación, buena gobernanza, buena fe, progresividad, la igualdad en el ejercicio de derechos y el derecho a la diferencia de los pueblos y comunidades indígenas, también debe de atender nuestro derecho de votar y ser votado conforme a lo que prevén los artículos 35 y 36 de la Constitución General de la República y artículo 23 y 24 de la Constitución Estatal y los Instrumentos Internacionales en la materia.

Por lo que la interpretación que se haga de la normatividad aplicable al caso concreto debe ser un sentido que resulte más favorable, ello atendiendo al principio pro persona a la luz del artículo 1 de la Constitución Federal y de los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte.

Derivado de lo anterior, se debe privilegiar nuestro derecho de votar y ser votado, puesto que es un derecho humano y renunciable.

8. Minuta de trabajo con fecha 21 de noviembre del 2013. Mediante la cual los funcionarios electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, así como el C. José Berdolla Gómez, Presidente Municipal, Lázaro Torres Pérez, Sindico Municipal, Jorge Alberto Rojas Pérez, Regidor de Hacienda, Pedro Jorge Ramírez Ruiz, Regidor de Obras, Evelio Martínez Pérez, Regidor de Salud, Alejandro

López Ramírez, Regidor de Ecología; por parte de la autoridad electa los ciudadanos Manuel Pacheco Pacheco Rodríguez, Presidente Electo, Leobardo Mario Hernández Pérez, Manuel Gilberto Gases Pérez, Presidente suplente electo, Sindico electo; Alberto García García, Regidor de Salud electo, David Ramírez Pérez, Regidor de Educación Electo, Laura Pérez Pérez, regidora de Ecología y Gabriel Pacheco Aquino, Regidor de Deportes; por parte de la agencia de San Gaspar Yagalaxi, Benito Pérez Martínez, Agente Municipal, Carlos Pacheco Núñez, Alejandro Esteva Núñez, Hernández pacheco morales, Gaspar Núñez Hernández y René Cruz Pacheco, con la finalidad de llevar a cabo una reunión de trabajo relacionada a la elección de las Autoridades Municipales de Ixtlan de Juárez Oaxaca, que fungirán del 1 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2016, en la cual se tomaron los siguientes acuerdos:

***“PRIMERO:** Volver a reunirse con la finalidad de tratar asuntos relacionados de la elección de los próximos concejales al Ayuntamiento de Ixtlan de Juárez Oaxaca el día viernes 29 de noviembre del 2013 a las diez horas en el local que ocupa la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos del Instituto con domicilio en la calle Belisario Domínguez # 1221, colonia Reforma, Centro, Oaxaca.*

***SEGUNDO:** Las partes aquí presentes, se dan por notificadas de la fecha, lugar y hora de la próxima reunión de trabajo.”*

9. Minuta de trabajo de fecha veintinueve de noviembre del dos mil trece. La cual se celebró en la Dirección ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, ante el personal de esta Dirección Ejecutiva, con las autoridades municipales, autoridades electas y una comisión de ciudadanos de la Agencia municipal de San Gaspar Yalaxi, del municipio de Ixtlán de Juárez, quienes después de tener sus intervenciones correspondientes y de un amplio dialogo entre la autoridad municipal, autoridad electa y la comisión de ciudadanos de San Gaspar Yalaxi, del municipio de Ixtlán de Juárez, llegan a la siguiente conclusion:

“ÚNICA: Que sea el Consejo General quien determiné lo procedente.”

CONSIDERANDOS

PRIMERO. COMPETENCIA

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción XLIV, y 14, fracción VII, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, en relación con lo previsto por el artículo 114, apartado B, segundo párrafo, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, a este Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca corresponde pronunciarse sobre la validez de las elecciones del Régimen de Sistemas Normativos y, en su caso, otorgar las constancias respectivas.

Lo anterior, en atención a que se trata de un municipio que elige a sus autoridades municipales en el marco lo previsto por los artículos 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, vinculados con los tratados internacionales en materia de derechos y cultura indígena suscritos por el Estado mexicano.

SEGUNDO. CALIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN

A efecto de realizar la calificación de la elección de concejales municipales, debe tenerse presente el marco constitucional y legal conforme al cual ha de determinarse la validez de tal elección:

A. MARCO NORMATIVO

En el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece, que: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, todo poder público dimana del mismo y se instituye para su beneficio, y el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. De lo anterior deriva, que al decidir cualquier cuestión concerniente a la integración de los poderes públicos, debe privilegiarse la voluntad del pueblo.

En el párrafo segundo del artículo 41 constitucional se establece, que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, de acuerdo con las bases que se indican en la propia Constitución.

En resumen, los principios constitucionales que deben observarse en comicios democráticos para la renovación de, entre otras, las autoridades municipales son: elecciones libres, auténticas y periódicas; sufragio universal, libre, secreto y directo; campañas electorales en las cuales

prevalezca el principio de equidad; organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo; certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral; el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales.

En cuanto al tema de derechos humanos, el artículo 1º constitucional dispone que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma Constitución establece.

En adición, la Constitución impone que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia.

En lo conducente a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, el artículo 2º apartado A, fracción VII, establece que la Nación Mexicana es única e indivisible. La cual tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

En este orden de ideas, la Constitución define que son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Además, que la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Se subraya, que el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional.

Dentro de esta relación, la Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

- Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.
- Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados.
- Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos.
- Entre otras.

Bajo estas premisas, se determina que las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en las legislaciones de las entidades federativas, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con sus tradiciones y normas internas.

En congruencia con lo antes expuesto, los artículos 25, 27, 29, 31 y 67, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, fundamentalmente, se encargan de desarrollar para el ámbito local, las disposiciones necesarias para configurar un gobierno republicano, representativo y popular, el cual, según expresa el numeral 29, tiene como base de su organización política y administrativa, el municipio libre.

El artículo 16 de la Constitución local, proclama la composición étnica plural del Estado de Oaxaca, sustentada en la presencia y diversidad de los pueblos y comunidades que lo integran, mencionando expresamente los Amuzgos, Cuicatecos, Chatinos, Chinantecos, Chocholtecos, Chontales, Huaves, Ixcatecos, Mazatecos, Mixes, Mixtecos, Nahuas, Triquis, Zapotecos y Zoques.

En esencia, la Constitución Local reconoce a los pueblos y comunidades indígenas el derecho a la libre determinación expresada como autonomía, gozando incluso de personalidad jurídica de derecho público; así como

derechos sociales, tales como: sus formas de organización social, política y de gobierno, sus sistemas normativos internos, jurisdicción sobre sus territorios, acceso a los recursos naturales de sus tierras y territorios, participación en el quehacer educativo y en los planes de desarrollo, formas de expresión religiosa y artística, acervo cultural y, en general, los mecanismos de protección para todos los elementos que configuran su identidad.

Para asegurar tales prerrogativas, impone al legislativo local establecer en la ley reglamentaria las normas, medidas y procedimientos que aseguren la protección y respeto de dichos derechos sociales, con el objeto de que sean ejercidas directamente por las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas o por quienes legalmente los representen, entre otras, las formas de organización social, política y de gobierno, y los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas.

Por su parte, los artículos 114, primer párrafo, apartado B, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1º, párrafo 1, Fracciones II y III, 4, numeral 1 y 2, 14, párrafo 1, fracciones I, II y VII, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, instituyen que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, es un órgano autónomo del Estado, responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones que cuenta con atribuciones, entre otras, coadyuvar en la preparación y desarrollo de las elecciones del régimen de Sistemas Normativos Internos de los pueblos y comunidades indígenas de la entidad, así como resolver las controversias que se presenten, emitir la declaratoria de validez y, en su caso, el otorgar las constancias respectivas.

A su vez, el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales es el cuerpo legal encargado de regular, entre otras cuestiones, lo relativo a los derechos y obligaciones político-electorales de la ciudadanía y la función estatal de organizar y vigilar las elecciones de los integrantes de los ayuntamientos.

En el Libro Sexto, el Código regula la renovación periódica de las autoridades municipales, que electoralmente se realizan mediante Sistemas Normativos Internos de los pueblos y comunidades indígenas.

En su artículo 255, establece las bases conceptuales de este tipo de procesos electorales, aplicables en todos los municipios con Sistemas Normativos Internos, en los siguientes términos:

"Artículo 255

- 1. Las disposiciones de este libro serán aplicables en todos aquellos municipios, que en el ejercicio de su derecho a libre determinación expresada en su autonomía, electoralmente se rigen por sus propios sistemas normativos internos.*
- 2. Se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas del Estado de Oaxaca a la libre determinación expresada en la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización política, así como para elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de igualdad frente a los hombres, en un marco que respete la Constitución Federal, la Constitución Estatal y la Soberanía del Estado.*
- 3. Las disposiciones contenidas en el presente Libro, son reglamentarias de los artículos 16 y 25, fracción II, del apartado A, de la Constitución Estatal, y tienen como objeto respetar, vigilar y sancionar los procedimientos electorales de los municipios y comunidades indígenas.*
- 4. En este Código se entiende por sistemas normativos internos, los principios generales, las normas orales o escritas, instituciones y procedimientos que los municipios y comunidades indígenas reconocen como válidas y vigentes, y aplican en el desarrollo de su autogobierno, en particular en la definición de sus cargos y servicios, la elección y nombramiento de las autoridades comunitarias del gobierno municipal, la resolución de sus conflictos internos cuya determinación no sea competencia del Congreso; la participación en los asuntos que son susceptibles de afectarles y la protección de sus principios, valores y culturas políticas propias en el ámbito municipal, como expresión del derecho de la libre determinación y autonomía reconocidos en la Constitución Federal, los tratados internacionales y la Constitución Estatal.*
- 5. El procedimiento electoral en el régimen de sistemas normativos internos, comprende el conjunto de actos realizados por los ciudadanos y las autoridades competentes de los municipios que se rigen por sus sistemas normativos internos, para la renovación y prestación de cargos y servicios municipales. **Estos actos comprenden desde la preparación de las asambleas electivas, el desarrollo de las mismas y el levantamiento de las actas correspondientes.***

6. El Instituto será garante de los derechos tutelados por los artículos 1 y 2 de la Constitución Federal, y 16 y 25, fracción II, del apartado A, de la Constitución Estatal, para salvaguardar el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas expresada en sus sistemas normativos internos y la autonomía para elegir a sus autoridades o gobiernos locales; así como en el reconocimiento a la diversidad de culturas y sistemas normativos existentes en el Estado.

7. Las normas, procedimientos y prácticas tradicionales, garantizarán que las mujeres disfruten y ejerzan su derecho a votar y ser votadas, en condiciones de igualdad frente a los hombres; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electas o designadas."

A partir de ello, en congruencia con los derechos fundamentales de los ciudadanos, así como de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, en su artículo 257, párrafo 1, fracciones I, II, y III, se establecen los derechos y obligaciones de los ciudadanos indígenas, entre otras, el de actuar de conformidad con las disposiciones que rijan la vida interna de sus municipios, el de participar en la permanente renovación y actualización de sus sistemas, así como cumplir con los cargos, servicios y contribuciones que la Asamblea les confiera.

Por lo que respecta a los requisitos de elegibilidad, los ciudadanos deben contar con las cualidades indicadas por el artículo 258 del Código, para estar en aptitud de resultar electos.

En cuanto a los actos previos a la elección a los que deben ajustarse los pueblos y comunidades indígenas para elegir a sus autoridades municipales, se establecen en los artículos 259 y 260 del Código.

En este orden de factores, en el artículo 261 del Código se disponen las reglas relativas a los actos correspondientes a la jornada electoral.

Se distingue en la norma, una prohibición expresa de intervención en dichos comicios dirigida hacia los partidos políticos, en su artículo 262.

En razón de lo anterior, previamente debe desplegarse una revisión respecto del cumplimiento de los requisitos que nos indica el artículo 263, de la normatividad multicitada.

Desde luego, que la satisfacción de los elementos fundamentales señalados con anterioridad permite considerar a una elección como producto del ejercicio popular de la soberanía, realizada dentro del

sistema jurídico-político construido en las constituciones federal y local, así como de los Sistemas Normativos Internos de los pueblos y comunidades indígenas y las demás disposiciones particulares de la elección.

Bajo esas premisas, puede decirse que este Consejo General estaría en condiciones de emitir la declaración de validez de la elección y, en su caso, expedir las constancias respectivas.

B. CONTROVERSIAS

1. Mediación como sistema alternativo para la solución de conflictos

El artículo 266, párrafo 1, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, concibe la mediación electoral como un medio alternativo para solucionar los conflictos, a través del cual las partes resuelven directamente una controversia con la intervención o colaboración del instituto.

Conforme la disposición jurídica anotada, debe decirse que esta alternativa de resolución de los conflictos electorales, está basada en los criterios de la democracia, la pacificación social, la tolerancia, el **diálogo**, el respeto y el **consenso**.

Ahora bien, de forma categórica el artículo 266, párrafo 1, del mismo ordenamiento nos indica que la mediación tiene por objeto *“construir acuerdos justos, aceptables y pacíficos”*.

En el caso que nos ocupa, debe diferenciarse cuando la conciliación se encuentra establecida como etapa del proceso judicial o anterior al mismo; de aquellos sistemas, como el nuestro, que la reglamentan como una mera facultad del órgano administrativo electoral.

Esas diferencias surgen cuando la conciliación se impone como etapa previa a la introducción al proceso judicial, cuya naturaleza preventiva tiende a convertirse en un proceso autónomo cuando logra alcanzar el objetivo de avenencia.

En cuyo caso, la conciliación sería obtenida desde la especialidad de su objeto, es decir, que no interesa el objeto material que discute la litis sino el acuerdo logrado desde el acto de avenencia. Es así, que cualquier forma convenida entre las partes responde a decisiones propias de quienes las asumen.

De este modo sería posible confirmar que existe un proceso de conciliación independiente porque tiene partes, tiene un órgano que intermedia y pacifica (verbi gratia juez de paz) y consigue un resultado útil y efectivo al interés de los comparecientes.

Esta condición demuestra que cuando se habla de conciliación no se piensa en el sentido estricto del término, sino en un sentido más amplio que tolera la declinación de los intereses, el sometimiento absoluto y la misma transacción o renuncia recíproca a posiciones procedentes irreductibles.

No obstante, debe traerse a colación que el artículo 264 del Código establece dos hipótesis para instaurar un proceso de mediación, a saber:

a) La primera de ellas, en los casos de controversias que surjan respecto de la renovación e integración de los órganos de gobierno, en cuyo caso, según lo dispuesto por párrafo 2 de la norma antes invocada.

Ahora bien, si tomamos en cuenta el principio Constitucional de la definitividad de las etapas, en la hipótesis analizada quedarían fuera las controversias que se plantean con respecto de las reglas aprobadas, es decir, aquellas precisamente con las que se desarrolló los comicios.

Se sostiene lo anterior, a partir de que se destacan en la norma los vocablos “*renovación e integración*” de los órganos de gobierno, cuestión que se materializa precisamente con la realización de los comicios - jornada electoral- y la calificación de la elección.

En ese sentido, en los casos de controversias que surjan desde la realización de los comicios y hasta antes de emitir el acuerdo de calificación de la elección, la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos podría solicitar la opinión de instituciones públicas calificadas para emitir criterios respecto de los Sistemas Normativos Internos, según lo indica el párrafo primero del artículo 265.

Ahora bien, previamente a cualquier resolución se establece el imperativo de buscar la conciliación entre las partes, lo que entonces, nos conduce a la instauración de un proceso de mediación con el objeto de construir acuerdos justos, aceptables y pacíficos; y con base en ellos, tomar por consenso entre las partes alguna de las variables de solución previstas en los párrafos del dispositivo 265 del Código invocado.

Sin embargo, es evidente que las variables de solución se encuentran inmersas en el proceso alternativo de resolución de conflictos, pues tales disposiciones corresponden al “CAPÍTULO QUINTO” denominado “De la Mediación y de los Procedimientos para la Resolución de Conflictos Electorales”; en consecuencia, solo pueden ser determinadas con la avenencia de las partes en conflicto.

En la hipótesis analizada, debe decirse que cuando se trata de irregularidades planteadas contra el resultado de la elección, así como la pretensión de nulidad de los comicios, este órgano administrativo electoral no cuenta con atribuciones para analizar dichas irregularidades, como se demostrará más adelante.

b) La segunda hipótesis, se refiere a cuando se manifieste alguna inconformidad con las reglas del sistema normativo interno, en base a lo previsto por el párrafo 3, del dispositivo legal mencionado.

Es decir, la legislación obliga a este órgano a proveer lo necesario y razonable para que las comunidades indígenas elijan a los ayuntamientos conforme sus Sistemas Normativos Internos, propiciando, la conciliación, por los medios a su alcance, como es la consulta con los ciudadanos que residen en el municipio.

Así las cosas, el órgano administrativo electoral debe procurar las condiciones que permitan llevar a cabo la celebración de los comicios, esto es con el objeto de conciliar las diversas posiciones respecto a las reglas del proceso electoral. Cuestión que debe entenderse como previa a la celebración de la jornada electoral.

Al respecto, existe un criterio regulador en la Jurisprudencia 15/2008, emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en su rubro y texto señalan:

Joel Cruz Chávez y otros

VS

Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Oaxaca y otras

Jurisprudencia 15/2008

COMUNIDADES INDÍGENAS. LA AUTORIDAD ELECTORAL DEBE PROVEER LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ELECCIONES POR USOS Y COSTUMBRES

(LEGISLACIÓN DE OAXACA).- De los artículos 2, apartado A, fracciones III y VII y 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, apartado C, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 58 y 125 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca, se desprende que las autoridades electorales están obligadas a proveer lo necesario y razonable para que las comunidades indígenas elijan a los ayuntamientos conforme al sistema de usos y costumbres, propiciando, la conciliación, por los medios a su alcance, como es la consulta con los ciudadanos que residen en el municipio. La autoridad electoral, en ejercicio de sus atribuciones, debe procurar las condiciones que permitan llevar a cabo la celebración de los comicios.

4ta Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-11/2007.—Actores: Joel Cruz Chávez y otros.—Autoridades responsables: Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Oaxaca y otras.—6 de junio de 2007.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretarios: Marco Antonio Zavala Arredondo y Adín de León Gálvez.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-2542/2007.—Actores: Moisés Ramírez Santiago y otros.—Autoridades responsables: Instituto Estatal Electoral de Oaxaca y otra.—28 de diciembre de 2007.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: José Luis Ceballos Daza.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-2568/2007.—Actores: Javier Felipe Ortiz García y otros.—Autoridades responsables: Instituto Estatal Electoral de Oaxaca y otra.—28 de diciembre de 2007.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: José Luis Ceballos Daza.

Notas: El contenido de los artículos 58 y 125 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca, el cual se interpreta en esta jurisprudencia actualmente corresponde con los diversos 79 y 143 respectivamente, del código vigente. La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de octubre de dos mil ocho, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 16 y 17.

2. Estudio de la controversia

Las peticiones planteadas por el ciudadano Carlos Pacheco Nuñez, como representante común de los Ciudadanos inconformes de la Agencia

Municipal de San Gaspar Yagalaxi, Ixtlán, de Juárez Oaxaca, resultan inatendibles, por los motivos y razones que a continuación se indican:

a) Precisión de la controversia:

La causa de pedir del ciudadano Carlos Pacheco Nuñez y otros, se circunscribe esencialmente a solicitar la invalidez de la asamblea de elección de concejales de fecha diecinueve de octubre de dos mil trece.

Si bien tales actos, se encuentran vinculados al ejercicio de gobierno, no menos cierto es, que han contribuido con las diferencias prevalecientes en el ámbito electoral.

Es así que la causa de pedir se circunscribe a la pretensión de que se declare la nulidad de la elección y, en consecuencia, a la reposición de todo el proceso electoral, incluso desde la emisión de la propia convocatoria.

b) Atribuciones del Instituto:

En cuanto a las atribuciones del instituto para la resolución de las controversias en este tipo de procesos, el artículo 264, párrafos 1 y 2 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, el Consejo General debe conocer las controversias respecto de la renovación e integración de las autoridades que se eligen mediante los sistemas normativos internos de los pueblos y las comunidades indígenas.

Este precepto otorga atribuciones al Consejo General para atender las controversias que se presenten mediante la implementación de un proceso de mediación electoral en el que se busque la conciliación entre las partes, en los casos anteriormente abordados.

Sin embargo, resulta importante enfatizar, que en términos de lo previsto por el artículo 41, fracciones VI, VII, VIII y IX, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos e para el Estado de Oaxaca, la implementación de las tareas que se derivan de dicho método alternativo de solución, corresponde a la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos.

De la misma manera, no debe perderse de vista que lo previsto por el artículo 26, fracción XLIV, del Código antes invocado, establece atribuciones para emitir un acto declarativo, sobre la validez o no de un proceso electoral del tipo que nos ocupa, el cual se encuentra vinculado

con el cumplimiento de los requisitos formales y constitucionales de una elección desarrollada en el marco de la auto determinación de los pueblos y comunidades indígenas.

c) Atribuciones del Tribunal:

Sin embargo, en la especie debe tomarse en cuenta lo previsto por artículo 111 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el cual dispone que la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral del Estado de Oaxaca es el Tribunal Estatal Electoral.

Entre las atribuciones que se le confieren al órgano jurisdiccional, se encuentran la de conocer los recursos y medios de impugnación respecto de la elecciones que se realizan mediante usos y costumbres, y las demás controversias que determine la ley respectiva; además de la declaración de nulidad de una elección, por las causas expresamente establecidas en la Ley:

"De los Tribunales Especializados

(Reformado mediante decreto No. 397, publicado el 15 de abril de 2011)

Artículo 111.- *El Poder Judicial contará con Tribunales Especializados, de carácter permanente, autónomos en su funcionamiento e independientes en sus decisiones, los cuales contarán con las siguientes características y atribuciones:*

I.- Sus resoluciones en el ámbito de su competencia serán definitivas e inatacables en el orden local;

II.- ..."

Los Tribunales a los que se refiere el primer párrafo de este artículo son los siguientes:

A. El Tribunal Estatal Electoral, es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral del Estado de Oaxaca, y tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Conocer de los recursos y medios de impugnación que se interpongan respecto de las elecciones de Gobernador del Estado, Diputados y Concejales de los Ayuntamientos por los regímenes de partidos políticos y de usos y costumbres, de la revocación de mandato del Gobernador del Estado, así como de todas las demás controversias que determine la ley respectiva;

II.- ...

III.- ...

IV.- El Tribunal Estatal Electoral podrá decretar la nulidad de una elección por causas expresamente establecidas en la ley. Se preverán los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias de impugnación, tomando en cuenta el principio de definitividad de los procesos electorales;

V. ...

VI.(sic) Las demás atribuciones que le confieran esta Constitución y la Ley.

En tanto que adicionalmente, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca, en su Libro Tercero denominado “De los Medios de Impugnación y de las Nulidades en las Elecciones que se rigen por el Sistema de Derecho Consuetudinario”, entre otras, establece las siguientes:

Artículo 4

1. El sistema de medios de impugnación en materia electoral, se integra con el conjunto de medios o vías legalmente establecidas para cuestionar la legalidad o validez de un acto de autoridad y tendentes a que se modifiquen o revoquen los acuerdos y resoluciones dictadas por los organismos electorales en los términos de esta Ley.

2. El sistema de medios de impugnación regulado por esta Ley tiene por objeto garantizar:

a) Que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad, y

b) La definitividad de los distintos actos y etapas de los procesos electorales.

3. El sistema de medios de impugnación se integra por:

a) ...

b) ...

e) Los que se establecen en esta Ley para garantizar la legalidad de las elecciones que se rigen bajo normas de derecho consuetudinario; y

f) ...

Artículo 70

1. Los medios de impugnación regulados en este libro tienen por objeto garantizar:

a) Que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten invariablemente a las normas, procedimientos y prácticas tradicionales de los pueblos y las comunidades indígenas, al principio de legalidad; y

b) La definitividad de los distintos actos y etapas del procedimiento electoral consuetudinario.

"De la Procedencia

Artículo 84

1. Durante el proceso electoral consuetudinario **exclusivamente en la etapa de resultados**, de declaración de validez y calificación de la elección procederá el recurso de inconformidad para impugnar las determinaciones de las autoridades electorales que violen el sistema normativo del pueblo o comunidad indígena, normas constitucionales o legales relativas a las elecciones de concejales a los ayuntamientos en los términos señalados en el presente Libro.

Artículo 85

1. Son actos impugnables a través del recurso de inconformidad, en los términos del Código y la presente Ley, los siguientes:

a) **Los resultados**, las declaraciones de validez de las elecciones y el otorgamiento de las Constancias de Mayoría;

b) La nulidad de la votación o **la nulidad de la elección**;"

"De la Competencia

Artículo 87

1. El Tribunal es competente para conocer y resolver el **recurso de inconformidad**.

Artículo 88

1. Las sentencias que recaigan a los recursos de inconformidad podrán tener los siguientes efectos:

a) ...

b) **Declarar la nulidad de la votación emitida para la elección de concejales a los ayuntamientos que se rigen bajo normas de derecho consuetudinario, en consecuencia, modificar o revocar el acta respectiva;**"

"Reglas Generales

Artículo 91

1. Las nulidades establecidas en este Título podrán afectar la votación emitida en la elección de concejales a los ayuntamientos y, en consecuencia, los resultados del cómputo de la elección impugnada.

"De las Nulidades de la Votación Recibida y de Elección

Artículo 93

1. Preservando las normas, procedimientos y prácticas tradicionales de elección de las autoridades municipales de los pueblos y comunidades indígenas, podrá declararse la nulidad de la votación recibida o la nulidad de una elección cuando haya quedado plenamente probado y sean determinantes para el resultado de la elección, irregularidades graves, no reparables en la elección que violen en forma alguna los principios de legalidad, libertad, certeza, imparcialidad y autenticidad en la emisión del voto."

d) Conclusiones:

De estas atribuciones, se pueden distinguir dos ámbitos de actuación, a saber:

1) La del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, de orden administrativo-electoral para resolución de controversias mediante la implementación de la mediación y la avenencia de las partes, así como la calificación de las elecciones correspondientes al régimen de Sistemas normativos internos de los Pueblos y comunidades indígenas, y

2) La del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, de carácter puramente jurisdiccional.

La función jurisdiccional del Tribunal Electoral se desarrolla mediante la resolución, en forma definitiva, de los medios de impugnación de carácter contencioso, previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca, los cuales tienen como finalidad garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación.

Lo que constituye en esencia, el sistema integral de justicia en materia electoral dentro del cual se prevén los mecanismos para que los actos y resoluciones de los órganos electorales se ajusten al principio de legalidad.

Cuestión que se logra mediante la interposición de medios de impugnación previstos por la ley, la instauración de las fases y procedimientos del proceso judicial, así como la emisión de una sentencia. Elementos que materializan con la reparación del daño o afectación a la esfera jurídica de algún ciudadano integrante de los pueblos y comunidades indígenas.

En consonancia con lo anterior, en los artículos 74, párrafo 1, y 75, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral dispone, reglas concretas respecto al ofrecimiento, admisión y valoración de las pruebas para la resolución de los medios de impugnación previstos en su Libro Tercero.

Así como, en su caso, recabar de oficio y ordenar el desahogo de los medios de pruebas que estime necesarios para resolver las inconformidades que le sean planteadas.

En cambio, en el procedimiento alternativo para la resolución de conflictos que se impone desarrollar al Consejo General cuando existan controversias, no se rige por Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, sino por las disposiciones previstas en los artículos 264, 265 y 266 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca.

Lo que impide que este órgano administrativo electoral admita las pruebas ofrecidas, ordene su desahogo y efectué las valoraciones correspondientes, en el marco de un proceso jurisdiccional conforme la normatividad antes apuntada, y cuya naturaleza misma del asunto cuestionado, resulta competencia exclusiva del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.

En efecto, toda actuación autoritaria, sin excepción, debe de encontrarse fundamentada en un precepto jurídico que directa e innegablemente la regule, pues si no existe este sustento legal, el proceder de la autoridad será contrario a derecho, toda vez que se estará en presencia de un órgano incompetente, lo que equivale a decir que el ente de autoridad de

que se trate se encuentra desprovisto de la potestad de proceder en el sentido en que lo hace.

Adicionalmente a lo antes planteado, es conveniente aclarar que sólo podrá ejercer una carga competencial específica un órgano de autoridad que encuentre su existencia jurídica en un ordenamiento legal, es decir, las autoridades no existen *-per se-*, sino que se hace necesario que se encuentren reguladas por el orden jurídico que les resulte aplicable al caso concreto.

De estimar lo contrario, a juicio de este órgano administrativo se estaría ante la presencia de una violación a los principios legalidad y de seguridad jurídica, a que hacen referencia los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En adición a lo anterior, el artículo 255, párrafo 5, del Código de la materia prevé que el procedimiento electoral que nos ocupa, comprende el conjunto de actos realizados por los ciudadanos y las autoridades competentes de los municipios que se rigen por sus sistemas normativos internos, para la renovación y prestación de cargos y servicios municipales.

Sobre esta situación dispone, que esos actos comprenden desde la preparación de las asambleas electivas, el desarrollo de las mismas y hasta el levantamiento de las actas correspondientes.

En ese sentido, el proceso electoral concluyó con el levantamiento de las actas respectivas elaboradas por la Mesa de los Debates, al finiquitar los trabajos vinculados a la jornada electoral, sus resultados y la remisión del expediente, dentro del plazo previsto por el artículo 261, párrafo 3, del Código.

En consecuencia, al haber concluido el proceso de conciliación intentado por el órgano electoral, sin que se alcancen los acuerdos necesarios para la resolución alternativa de la controversia. Con base en el principio Constitucional de la definitividad de las etapas, debe decirse que en lo solicitado por el grupo encabezado por Carlos Pacheco Nuñez, Alejandro Esteban Nuñez, Gaspar Nuñez Hernández y otros, de la agencia municipal de San Gaspar Yalaxi, Ixtlán de Juárez, subyacen diversos elementos sustantivos que están íntimamente vinculados a los medios de impugnación y a las hipótesis normativas previstas por los artículos 4, párrafos 1, 2, incisos a) y b), y 3, inciso e), 70, párrafo 1, incisos a) y b), 84,

párrafo 1, 85, párrafo 1, incisos a) y b), 87, párrafo 1, 88, párrafo 1, inciso b), 91, párrafo 1, 93, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca.

En tal sentido, por disposición del sistema jurídico antes descrito, este órgano administrativo concluye que no ha lugar a determinar las pretensiones solicitadas por el grupo inconforme con el resultado de la elección, en virtud de que carece de jurisdicción y competencia para acceder a lo solicitado.

En adición a lo anterior, además se advierte que en el caso se debe garantizar a los integrantes de los pueblos indígenas “el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado”, en base a los criterios de jurisprudencia cuyo rubro y texto mencionan:

Herminio Quiñónez Osorio y otro

VS

LVII Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, erigida en Colegio Electoral y otro

Jurisprudencia 7/2013

PUEBLOS INDÍGENAS. SE DEBE GARANTIZAR A LOS CIUDADANOS QUE LOS CONFORMAN UN EFECTIVO ACCESO A LA JURISDICCIÓN ELECTORAL.- De la interpretación sistemática de los artículos 4, párrafo primero y 17, párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se debe garantizar a los integrantes de los pueblos indígenas “el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado”, que los tribunales deben estar expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, así como el que se garantice la independencia judicial y la plena ejecución de sus resoluciones, lo que obliga a tener un mayor cuidado en la aplicación de las causas de improcedencia que se prevén expresamente en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y las que derivan de la normatividad aplicable en la materia. En ese tenor, una intelección cabal del enunciado constitucional “efectivo acceso a la jurisdicción del Estado”, debe entenderse como el derecho de los ciudadanos que conforman las respectivas comunidades indígenas a lo siguiente: a) La obtención de una sentencia de los órganos jurisdiccionales del Estado; b) La real resolución del problema planteado; c) La motivación y fundamentación de dicha decisión jurisdiccional y, d) La ejecución de la sentencia judicial. Esta última conclusión se apunta porque los integrantes de dichas comunidades deben tener un acceso real a la jurisdicción del Estado, no virtual, formal o teórica, por lo que se debe dispensar una justicia en la que se puedan defender sin que se

interpongan impedimentos procesales por los que indebidamente se prescinda de sus particulares circunstancias, ya que la efectividad de la administración de justicia electoral debe traducirse en un actuar que sustraiga al ciudadano de esas comunidades de una resolución o sentencia alejada de formalismos exagerados e innecesarios, para que, en forma completa y real, el órgano jurisdiccional decida materialmente o en el fondo el problema planteado.

5ta Epoca:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-037/99.—Actores: Herminio Quiñónez Osorio y otro.—10 de febrero de 2000.—Unanimidad de votos.—Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.—Secretario: Juan Carlos Silva Adaya.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-9167/2011.—Actores: Rosalva Durán Campos y otros.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán.—2 de noviembre de 2011.—Mayoría de seis votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Fernando Ramírez Barrios.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1640/2012.—Actor: Andrés Nicolás Martínez.—Autoridades responsables: Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del Estado de Oaxaca y otras.—30 de mayo de 2012.—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretario: Héctor Rivera Estrada.

Notas: El contenido del primer párrafo del artículo 4.º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se interpreta en la presente tesis, corresponde con el 2.º, Apartado A, fracción VIII, del ordenamiento vigente a la fecha de publicación de la presente Compilación.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de junio de dos mil trece, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 12, 2013, páginas 19, 20 y 21.

Joel Cruz Chávez y otros

VS

Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Oaxaca y otras

Jurisprudencia 13/2008

COMUNIDADES INDÍGENAS. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS JUICIOS ELECTORALES PROMOVIDOS POR SUS INTEGRANTES.-La interpretación sistemática y funcional de los artículos 2, apartado A, fracción VIII, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia

Electoral; 2, 4, 9, 14 y 15 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 2, 4, apartado 1 y 12 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y 1, apartado 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conduce a sostener que en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por integrantes de comunidades o pueblos indígenas, en el que se plantee el menoscabo de su autonomía política o de los derechos de sus integrantes para elegir sus autoridades o representantes, conforme a sus propias normas, procedimientos y prácticas tradicionales, la autoridad jurisdiccional electoral debe no sólo suplir la deficiencia de los motivos de agravio, sino también su ausencia total y precisar el acto que realmente les afecta, sin más limitaciones que las derivadas de los principios de congruencia y contradicción, inherentes a todo proceso jurisdiccional, porque tal suplencia es consecuente con los postulados constitucionales que reconocen los derechos de estos pueblos o comunidades y sus integrantes. Lo anterior, porque el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, prevista en el artículo 17 constitucional, tiene como presupuesto necesario la facilidad de acceso a los tribunales. Esto es así, porque el alcance de la suplencia de la queja obedece al espíritu garantista y antiformalista, tendente a superar las desventajas procesales en que se encuentran, por sus circunstancias culturales, económicas o sociales.

4ta Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-11/2007.—Actores: Joel Cruz Chávez y otros.—Autoridades responsables: Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Oaxaca y otras.—6 de junio de 2007.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretarios: Marco Antonio Zavala Arredondo y Adín de León Gálvez.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-2568/2007.—Actores: Javier Felipe Ortiz García y otros.—Autoridades responsables: Instituto Estatal Electoral y otra.—28 de diciembre de 2007.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: José Luis Ceballos Daza.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-2569/2007.—Actores: Epifania Quiroga Palacios y otros.—Autoridades responsables: Sexagésima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, erigida en Colegio Electoral y otra.—28 de diciembre de 2007.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Genaro Escobar Ambríz. La Sala Superior en sesión pública celebrada el primero de octubre de dos mil ocho, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 17 y 18.

Herminio Quiñónez Osorio y otro

VS

LVII Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, erigida en Colegio Electoral y otra

Jurisprudencia 28/2011

COMUNIDADES INDÍGENAS. LAS NORMAS PROCESALES DEBEN INTERPRETARSE DE LA FORMA QUE LES RESULTE MÁS FAVORABLE.- *De la interpretación funcional del artículo 2º, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce y garantiza a las comunidades indígenas el derecho de acceso pleno a la jurisdicción del Estado, se deriva el deber de establecer protecciones jurídicas especiales en favor de las comunidades indígenas y de los sujetos que las conforman, considerando sus particulares condiciones de desigualdad y facilitándoles el acceso efectivo a la tutela judicial, a fin de no colocarlos en un verdadero y franco estado de indefensión, al exigirles la satisfacción o cumplimiento de cargas procesales que sean irracionales o desproporcionadas, de acuerdo con su circunstancia de desventaja social y económica ampliamente reconocida en la Constitución y por el legislador en diversos ordenamientos legales. Por tanto, dado su carácter tutelar, debe considerarse que los medios de impugnación por los cuales se protegen los derechos político-electorales del ciudadano, se rigen por formalidades especiales para su adecuada protección, en razón de lo cual, las normas que imponen cargas procesales, deben interpretarse de la forma que resulte más favorable a las comunidades indígenas.*

5ta Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-037/99.—Actores: Herminio Quiñónez Osorio y otro.—Autoridades responsables: LVII Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, erigida en Colegio Electoral y otra.—10 de febrero de 2000.—Unanimidad de votos.—Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.—Secretario: Juan Carlos Silva Adaya.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-2542/2007.—Actores: Moisés Ramírez Santiago y otros.—Autoridades responsables: Instituto Estatal Electoral de Oaxaca y otra.—28 de diciembre de 2007.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: José Luis Ceballos Daza.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-2568/2007.—Actores: Javier Felipe Ortiz García y otros.—Autoridades responsables: Instituto Estatal Electoral de Oaxaca y otra.—28 de diciembre de 2007.—Unanimidad de cinco votos.—

Ponente: Conancio Carrasco Daza.—Secretario: José Luis Ceballos Daza.

Notas: En el primero de los precedentes se invocó el primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que actualmente se encuentra en la fracción VIII, del apartado A, del artículo 2º, de la Constitución, según la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 14 de agosto de 2001. La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de noviembre de dos mil once, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 19 y 20.

Por lo tanto, solo puede garantizarse el acceso a la justicia, mediante la instauración de un proceso judicial en el que se cumplan escrupulosamente las formalidades esenciales del mismo.

Las cuestiones antes expuestas resultan relevantes en la especie, dado que conllevan peticiones formuladas como irregularidades de la jornada electoral, en las que la pretensión es la declaración de nulidad de la elección que nos ocupa, entonces debe decirse, que este tipo de determinaciones son una competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales del Estado.

Misma suerte, ocurre con la pretensión de incidir, desde el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en la realización de obras o actos propios del ejercicio de gobierno municipal, dado que la naturaleza de estas decisiones, no corresponden a los fines, obligaciones y atribuciones de este órgano. Máxime si en la especie no confluye la avenencia de las partes.

C. DE LOS REQUISITOS PARA EMITIR LA DECLARACION DE VALIDEZ

Sobre las bases antes precisadas, este Consejo General procede al análisis del desarrollo del proceso electoral, conforme con las etapas y actos que lo integran, incluso de aquellos que aunque formalmente no se efectuaron en él, tienen una vinculación directa con el mismo:

I. El apego a las normas establecidas por la comunidad o los acuerdos previos. En términos de lo indicado por el artículo 263, párrafo 1, fracción I, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, debe ponderarse primeramente que la elección se haya apegado a las normas establecidas por la comunidad y, en su caso, a los acuerdos previos.

Bajo esa premisa, del estudio integral del expediente no se advierte incumplimiento alguno a las reglas de la elección establecidas por la comunidad, mismas que se materializaron en la convocatoria particular de la elección y demás documentales que obran en el expediente.

En ese tenor, debe decirse que las normas, procedimientos y prácticas que se llevan a cabo al interior de las comunidades indígenas para la elección de sus representantes, se estiman como disposiciones particulares de orden electoral para la propia comunidad, debido a que es así como se materializa la libre autodeterminación de las comunidades indígenas que consagran los artículos 2, de la carta magna y 16 de la Constitución Local. Así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas.

II. Que la autoridad electa haya obtenido la mayoría de votos. Por su parte, el artículo 263, párrafo 1, fracción II, del Código citado, impone el imperativo al Consejo General de revisar que los concejales electos hayan obtenido la mayoría de votos.

En concordancia, debe decirse que ha quedado señalado en los antecedentes del presente acuerdo el número de votos emitidos a favor de los candidatos contendientes, y a simple vista puede observarse que la autoridad electa obtuvo la mayoría de votos el día de la jornada electoral, cuestión que puede corroborarse con las documentales que contienen el computo de la elección que se encuentran agregadas al expediente.

III. La debida integración del expediente. Por último, el artículo 263, párrafo 1, fracción III, del Código, determina el deber al Consejo General de revisar la debida integración del expediente.

De acuerdo con las documentales que obran en el expediente, a juicio de este Consejo General se encuentra debidamente integrado en la elección que nos ocupa, dado que en él se encuentran, entre otros, la convocatoria de la elección en las que se establecen las reglas particulares del proceso comunitario, los acuerdos alcanzados, así como las respectivas actas levantadas por funcionarios de casilla, en las que se asentaron los resultados de la elección.

IV. De los derechos fundamentales. De igual forma, este Consejo General no advierte de forma evidente la violación a algún derecho fundamental de los pueblos y comunidades indígenas, como son el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias de los pueblos y comunidades indígenas; así como el derecho de auto determinación en la designación de sus autoridades comunitarias, entre otros.

De la misma manera, no se advierte la existencia de alguna determinación contraria o incompatible con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional, ni violación alguna a los derechos humanos internacionalmente reconocidos, mismos que quedaron señalados con anterioridad.

V. Requisitos de elegibilidad. Los ciudadanos electos satisfacen los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 113 de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Oaxaca; y 258, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, así como los previstos en los Sistemas Normativos Internos de los pueblos y comunidades indígenas participantes.

Lo antes expuesto, permite a este Consejo General concluir que ha lugar a emitir la declaratoria de la validez de la elección que nos ocupa y ordenar la emisión de las constancias respectivas.

TERCERO. Libre determinación y Sistemas Normativos Electorales.

El artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y con ello su autonomía política para decidir sobre sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. Lo anterior en consonancia con lo establecido en los instrumentos internacionales tales como el Convenio 169 de la Organización Federal del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Ahora bien, tal como lo ha señalado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la libre determinación de los pueblos indígenas no puede poner en riesgo la unidad nacional, pero sí implica “la posibilidad de elegir libremente su situación dentro del estado mexicano, que no conduce a su disolución, sino al reconocimiento del derecho fundamental de los pueblos que lo componen para determinar su suerte, siempre y

cuando se preserve la unidad nacional”. Es decir, que la autonomía indígena está acotada a que no se ponga en riesgo la unidad nacional, pero fuera de esta situación, tienen el derecho fundamental de autodeterminarse.¹

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo se funda sobre el reconocimiento de las aspiraciones de los pueblos indígenas y tribales a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida, y de su desarrollo económico, y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven. Los principios de participación y consulta son las piedras angulares del Convenio.

En el caso de la entidad oaxaqueña, históricamente los pueblos indígenas han tenido como base de su organización política a la comunidad (ya se integre ésta por una o varias localidades). De esta manera el municipio establecido como uno de los tres niveles de gobierno de la federación mexicana, es una figura que unió administrativa y de manera artificial a un conjunto de comunidades, en algunos casos incluso sin relación entre sí, ni por afinidad étnica, territorial, socio-política o cultural.

Derivado de lo anterior, cada comunidad tiene su gobierno local; su ciudadanía elige a sus autoridades de acuerdo a sus sistemas normativos internos, mediante un complejo entramado normativo con lo cual está garantizado su derecho a la representación política. De esta manera la figura institucional conocida como ayuntamiento en los hechos no ha sido sino el gobierno local de la comunidad que tiene la categoría de cabecera municipal, y por tanto no realiza acciones de gobierno en las otras comunidades.²

Los Sistemas Normativos Internos como mecanismos electorales alternativos gozan de un importante margen de autonomía para definir las reglas de renovación del poder político, acotadas principalmente al espacio local o comunitario con modelos de organización sociopolítica autónoma o autonomías comunitarias. Los derechos político electorales

¹ ***Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas.*** Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2013.

² Martínez Sánchez; Francisco, El derecho y la justicia en las elecciones en Oaxaca, 2011; Hernández Díaz, Jorge; Ciudadanías en conflicto, Política del reconocimiento, expresiones y discurso en una zona urbana, UABJO-SEDESOL-Plaza y Valdés, México, 2010; Bailón Corres, Jaime; Pueblos indios, élites y territorios, COLMEX, México, 1999.

de la ciudadanía indígena se realizan siempre en ese espacio fundamental; pero no siempre este ejercicio se proyecta en la elección del Ayuntamiento, cuerpo de autoridades tradicionalmente nombrada por la comunidad cabecera del municipio.

En Oaxaca, desde la primera Constitución estatal de 1824, las comunidades fueron reconocidas con las mismas facultades y atribuciones que a los Ayuntamientos. La República de Indios, categoría heredada de la Colonia, logró conservar su autonomía. Aunque la denominación se cambió en la Constitución de 1857 por la de municipios y agencias municipales y de policía, en las diversas legislaciones secundarias subsistió este rasgo que en los hechos se traducía en el ejercicio de una autonomía por cada una de las comunidades que integran al municipio.³

El establecimiento del municipio como célula básica de los estados federados y el país, representó una camisa de fuerza, pues aglutinó a comunidades históricamente autónomas en un ámbito formal más amplio, que se constituía no sólo en la circunscripción administrativa sino que tomaba la intermediación política de ellas. La resistencia a esta nueva figura explica, en parte, la existencia en Oaxaca del mayor número de municipios del país: 570, casi el 23 por ciento del total nacional.

Es por eso también que, en un importante número de municipios, cada comunidad elige a sus autoridades locales y así se explica por qué los ayuntamientos están integrados, generalmente, sólo por personas residentes en la cabecera municipal: en los hechos, el Ayuntamiento representa al gobierno de una localidad (la cabecera), no al de los habitantes de todas las comunidades que integran el municipio. A cambio, éstas eligen y participan en su sistema de organización comunitaria en dónde está garantizado su derecho a la representación política, y mantienen una relación de cordialidad con la cabecera, pero con independencia unas de otras. Esto es, el municipio constituye una figura administrativa y de representación política hacia el exterior, pero la gobernabilidad constituye una prerrogativa de cada comunidad y sus instituciones internas, prevaleciendo las autonomías comunitarias que garantizan a su vez, la representación política en las instituciones de gobierno comunitarias.

³Bailón, 1999; Mendoza, 2001, Hernández y Juan, 2011.

Por ello es necesario puntualizar que no debe confundirse, al menos para Oaxaca, la localidad con el concepto de comunidad. El tema que nos ocupa se inserta en la relación que existe entre estas comunidades dentro del espacio político municipal, es decir en las relaciones intramunicipales. En Oaxaca una comunidad puede equivaler a un municipio o bien, compartir con otras comunidades este espacio administrativo pero, en este caso, no siempre son parte de una unidad política. La forma de integración de estos sistemas normativos comunitarios o su separación en el marco municipal es variable. No siempre existe una articulación de gobierno. Una hipótesis acerca de esta desarticulación deriva de que en los municipios en donde las comunidades tienen territorios agrarios diferenciados no comparten una identidad política ni territorial⁴ y es posible que las tensiones y conflictos de linderos inhiban la integración y la participación política de las Agencias en la vida orgánica de la Cabecera.

En ese sentido, la comunidad territorial (agraria) y política son dos elementos imbricados y claves en la comprensión de los sistemas normativos internos; así como la dinámica intercomunitaria es esencial para el análisis de la conflictividad en el espacio municipal, pues como ya señalé, en un importante número el conflicto se dirime en la arena territorial y jurisdiccional.

Lo anterior significa que en donde las agencias participan en la elección del Ayuntamiento, el Sistema Normativo Interno tiene mecanismos tradicionales de integración al sistema de cargos porque esa ha sido la costumbre mediada por lazos de identidad cultural y territorial. Sin embargo, y es una situación de especial relevancia por sus implicaciones, en donde no participan, una integración supone un cambio estructural de gran profundidad al sistema de normas tradicional local porque hasta el momento de la controversia no era ni estaba considerado como parte de la vida orgánica de la comunidad en cuestión.

En ese sentido, es necesario matizar que el tema no se enfoca desde la perspectiva de si una cabecera es excluyente de sus agencias y que por esa exclusión éstas reclaman su derecho a participar, sino la cuestión es que la exclusión (de derechos) como tal se configura a partir de la exigencia de participación electoral y no antes, pues en realidad es una reacción de la

⁴María Cristina Velásquez C, 2000.

cabecera ante la amenaza que supone tal intervención de las agencias, en un sistema que no las tenía contempladas. De ahí que la incompatibilidad inicial es evidente y se perfila con un alto nivel de antagonismo.

Es pertinente señalar que un elemento que detona la demanda de participación de las Agencias Municipales y de Policía en la elección de ayuntamientos, en dónde antes no participaban, deriva de la disputa que se tiene por la distribución de los ramos 28 y 22, dado que consideran hay un reparto inequitativo de esos recursos y, dado que el cabildo municipal es el encargado de definirlo, desean entonces que sus representantes formen parte del mismo. Por ello también, en estos casos el conflicto no se reduce a ciudadanos de unas comunidades que desean participar en una elección, el problema es más profundo pues se traduce en la confrontación (que puede alcanzar niveles de enfrentamiento violento incluso) de comunidades entre sí.

Aunque es claro que el concepto de libre determinación de los pueblos indígenas no tiene los mismos alcances que recibe en el derecho internacional de los Estados, es importante señalar que la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos así como el de Derechos Sociales y Culturales y algunas resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas le han dado un peso muy importante a este derecho, al grado de argumentarlo como base para el ejercicio de los derechos humanos individuales, es decir, si no hay un reconocimiento jurídico de las instituciones, normas y procedimientos indígenas, es más fácil que tanto el Estado como las instituciones indígenas transgredan los derechos humanos de sus miembros.

En los municipios de Oaxaca distintos factores internos y externos han motivado una dinámica de reajuste de sus instituciones, procedimientos, reglas en la construcción y ejercicio de la ciudadanía y acceso a los gobiernos locales. Pero este proceso debe estar enmarcado en la búsqueda de consensos entre los distintos actores. Más aún cuando la controversia deriva de la demanda del ejercicio de derechos colectivos (la exigencia de comunidades con categoría de agencias municipales o de policía) y se opone, al menos coyunturalmente, a otros ejercicio de la colectividad (los derechos que defiende la comunidad con categoría de cabecera municipal).

De ello resulta que para lograr armonizar ambas demandas se requiere tocar parte esencial de los sistemas normativos internos de todas estas comunidades. Y, si bien es cierto que es legítimo el derecho de unos y otros, lo es también que se debe dar un periodo de ajuste interno, basado en un proceso de reflexión y consulta de todas las partes. Hecho que es difícil hacerlo en el reducido tiempo de un proceso electoral.

Al respecto los propios instrumentos internacionales han marcado el derecho que tienen las comunidades conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales y por tanto a la consulta respecto a su devenir y ante los cambios administrativos y/o legislativos que puedan incidir en su vida como pueblos; así lo establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

De igual forma los criterios de los tribunales han establecido directrices al respecto, el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que: *“Es evidente que algunas de estas instituciones (las normas indígenas) pueden, en apariencia o de hecho, contravenir otros principios constitucionales o de derechos humanos, particularmente derechos individuales. En estos casos, será necesario hacer una ponderación de derechos basada en un exhaustivo análisis cultural de los valores protegidos por la norma indígena, las posibles consecuencias para la preservación cultural, y las formas en que la cultura indígena puede incorporar derechos sin poner en riesgo su continuidad como pueblo”*.

Situación contemplada también en el código electoral oaxaqueño en el artículo 257 que establece en su numeral 2: *“El ejercicio de los derechos político-electorales de las ciudadanas y los ciudadanos de las comunidades y municipios que se rigen bajo los sistemas normativos internos, se podrán restringir con motivo de la defensa y salvaguarda de la identidad y la cultura de dichas comunidades y municipios”*.

Sobre esta base, debe decirse, que en el caso de las controversias presentadas entre agencias y cabecera municipal, es evidente e imperativo que el sistema normativo interno del municipio y las comunidades que la integran requieren una transformación esencial y, por

ello, en el caso resulta imprescindible considerar medidas especiales, con carácter objetivo y temporal, con la finalidad de dotar a los integrantes de las diversas comunidades la posibilidad de recomponer y armonizar su entramado normativo e institucional, pero para ello se requiere de un periodo de ajuste y de búsqueda de consensos para la construcción del nuevo sistema normativo interno. Ello está previsto en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas que establece en su artículo 5: Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales.

Una situación prevista también por el legislador local en el Código Electoral oaxaqueño en su artículo 265, numeral III, que señala que *“cuando las diferencias sean respecto a las reglas, instituciones y procedimientos de su sistema normativo interno, se emitirá una recomendación para que los diversos sectores de la comunidad realicen la revisión de sus reglas a efectos de adecuarlas a las nuevas condiciones sociales para así garantizar que las nuevas disposiciones normativas se apliquen en las elecciones subsecuentes”*.

De ahí que este Consejo General resuelve, por un lado, validar la elección realizada con base al sistema normativo interno vigente en el Municipio de Ixtlán de Juárez, Oaxaca. Por el otro, establece la vinculación a las nuevas autoridades municipales de generar el proceso de consulta y la generación de acuerdos necesarios para modificar su sistema normativo interno que permita establecer los mecanismos necesarios para garantizar la participación y representación de toda la ciudadanía del municipio en la elección de su gobierno municipal en el siguiente proceso electoral ordinario. Finalmente se instruye a la Dirección de Sistemas Normativos Internos a generar y conducir el proceso de mediación a fin de alcanzar el objetivo antes señalado.

Lo anterior en correspondencia con la propia Declaración en comento, que establece el derecho de los pueblos indígenas a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de conflictos y controversias con los Estados u otras partes, así como a que en esas decisiones se deben tener en consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de derechos humanos.

En mérito de lo expuesto anteriormente, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 263, fracciones I, II y III, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, debe declararse la validez de la elección, pues la asamblea general de renovaciones de los concejales se apegó a las normas establecidas por la comunidad y los acuerdos previos a la elección correspondiente; y el expediente respectivo fue debidamente integrado, en consecuencia, este Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 113 y 114, apartado B, segundo párrafo, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 18; 92, fracción XLIV; 258; 259; 260; 261; 262 y 263, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, estima procedente calificar y declarar la validez de la elección celebrada en el Municipio de Ixtlán de Juárez, Oaxaca; que electoralmente se rige bajo Sistemas Normativos Internos, al tenor del siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. En términos de lo establecido en los considerandos segundo y tercero del presente acuerdo, se califica como legalmente válida la elección de concejales al Ayuntamiento Municipal celebrada el día diecinueve de octubre de dos mil trece, en el municipio de Ixtlán de Juárez, Oaxaca; resultando electos como concejales municipales los ciudadanos que a continuación se precisan y en consecuencia, expídase la constancia respectiva, para el periodo comprendido del uno de enero del dos mil catorce al treinta de junio del dos mil quince, en los términos siguientes:

CARGO	CONCEJALES ELECTOS
	NOMBRE
Presidente Municipal	Manuel Pacheco Rodríguez
Suplente	Manuel Gilberto Garcés Pérez
Sindico Municipal	Leobardo Mario Hernández Pérez
suplente	Eusebio Martínez Martínez
Regidor Primero	Rolando Pérez Sánchez

CARGO	CONCEJALES ELECTOS
	NOMBRE
Suplente	Rodrigo Jiménez Pérez
Regidor Segundo	David Ramírez Pérez
Suplente	Nora García Aquino
Regidor Tercero	Alberto García García
suplente	Agustín León García
Regidor Cuarto	Guadalupe Ángel Ruiz Martínez
suplente	Javier Medrano Martínez
Regidor Quinto	Gabriel Pacheco Aquino
Suplente	Pablo Hernández Pérez
Regidor Sexto	Laura Pérez Pérez
Suplente	Salvador Pizarro Jiménez

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el considerando tercero del presente acuerdo, se emite recomendación a los diversos sectores del municipio de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, para que realicen la revisión de sus reglas, a efecto de adecuarlas a las nuevas condiciones sociales, para así garantizar que las nuevas disposiciones normativas se apliquen en las elecciones subsecuentes.

TERCERO. Publíquese este acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en cumplimiento a lo indicado por los artículos 15 párrafo 2, y 34, fracción XII, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, para ese fin expídase por duplicado este acuerdo. Así mismo, hágase del conocimiento público en la página de internet del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

NOTIFÍQUESE el presente acuerdo, por oficio, al Honorable Congreso del Estado de Oaxaca para los efectos legales pertinentes, y por conducto de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos de este Instituto al ciudadano Carlos Pacheco Nuñez en el domicilio señalado para tal efecto.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos de los miembros del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, siguientes: Licenciado Víctor Leonel Juan Martínez, Consejero Electoral; Maestro Juan Pablo Morales García, Consejero Electoral; Licenciada Alba Judith Jiménez Santiago, Consejera Electoral; Licenciado Víctor Manuel Jiménez Vilorio, Consejero Electoral; Maestro David Adelfo López Velasco, Consejero Electoral, y Maestro Alberto Alonso Criollo, Consejero Presidente, en sesión especial celebrada en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en sesión especial celebrada en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el día veintinueve de diciembre del dos mil trece, ante el Secretario General, quien da fe.

POR ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL

CONSEJERO PRESIDENTE

SECRETARIO

ALBERTO ALONSO CRIOLLO

FRANCISCO JAVIER OSORIO ROJAS